

Vindicación de la participación política de las mujeres. Participación política femenina a dos siglos de la Revolución de Mayo: de la exclusión absoluta a las acciones afirmativas

POR **MARÍA VERÓNICA PICCONE** (*)

Sumario: I. Introducción. II. Un poco de historia con mujeres. II. A. Breve recapitulación de la situación de las mujeres antes del Centenario de la Revolución de Mayo. II. B. Del Centenario a la conquista del derecho al sufragio. II. C. La aniquilación absoluta de los derechos y el protagonismo de las mujeres. II. D. Democracia, cupo femenino y Constitución. III. Conclusiones. IV. Bibliografía.

Resumen:

El artículo realiza un breve recorrido en torno a la participación política de las mujeres partiendo de las épocas previas a la Revolución de Mayo hasta llegar a los tiempos actuales. Procura desde el punto de vista histórico visibilizar el rol político de las mujeres a través de la figura de algunas precursoras; analiza los fundamentos y prejuicios que a lo largo de 200 años de historia nacional han justificado su inclusión/exclusión, y da cuenta de los debates, dispositivos y leyes que cristalizaron estas concepciones.

Finalmente, a través del examen del principio de igualdad, analiza la centralidad del mismo y reafirma a las acciones positivas -cuya ley instituyente es la más importante en el tema desde la sanción de la Ley de Voto Femenino- como instrumento destinado a consolidar la igualdad de hecho consagrada en la Constitución reformada en 1994 frente a la exigua igualdad formal de 1853.

Palabras Clave: historia, mujeres, igualdad, acciones positivas

Summary:

The article presents a brief tour around women's political participation from the times previous to the Revolución de Mayo to the present days. From the historical point of view, it seeks to visualize women's political rol throw the figure of some precursors; it analyzes the basis and prejudices that over 200 years of national history have justified their inclusion/exclusion; and accounts the discussions, arrangements and laws that crystallized these concepts.

Finally, through the examination of the principle of equality, this work analyzes its importance and reaffirms the positive actions -whose instituting law is the most important in the subject, since the sanction of the law for universal suffrage-, as an instrument destined to the consolidation of the facto equality established in the National Constitution reformed in 1994, facing the meager formal equality of 1853.

Key words: history, women, equality, positive actions.

Vindicación de la participación política de las mujeres.

Participación política femenina a dos siglos de la Revolución de Mayo: de la exclusión absoluta a las acciones afirmativas.

(*) Profesora Adjunta de Derecho Político, Cátedra III - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP; y Directora de Derechos Humanos, UNLP.

Autor/a: Figchen

I. Introducción

Deliberar en el marco de los doscientos años transcurridos desde el acto fundante de nuestro Estado no es una tarea fácil puesto que cada día somos más concientes de los condicionamientos que parten del contexto histórico en el que nos encontramos, de la subjetividad propia de cada individuo y de que nuestra opinión es sólo una entre tantas a las que el pluralismo de los últimos veinticinco años nos ha habituado.

En el marco de las múltiples reflexiones que pueden surgir a partir de este hito, lo que nos interesa en esta ocasión es recorrer brevemente algunas de las líneas que nos ubican en las vísperas del Bicentenario de la Revolución de Mayo como un país cuya ciudadanía vive en la permanente tensión por el reconocimiento y acceso a los derechos.

Particularmente, pretendemos extraer algunos hechos centrales que desde el punto de vista legal han permitido que las mujeres -excluidas del ámbito público y jurídico antes, durante y después de la Revolución de Mayo- pasaran a convertirse a finales del siglo XX en ciudadanas cuasi plenas a partir del desarrollo de la sanción e implementación de un mecanismo de acción positiva que las contempla.

A esta falta de plenitud en el ejercicio de los derechos ciudadanos nos referiremos al final de este trabajo al igual que señalaremos algunos deberes pendientes y la necesidad de que estos derechos sean afianzados.

II. Un poco de historia con mujeres

II. A. Breve recapitulación de la situación de las mujeres antes del Centenario de la Revolución de Mayo.

El proceso de lucha por el reconocimiento explícito de los derechos de las mujeres y su emancipación respecto del hombre tanto en el campo civil como en el político tiene origen en el caso argentino a principios del siglo XX a partir del ideario socialista.

Sin embargo, ello no significa que las mujeres no hayan desempeñado un rol relevante en las etapas previas de nuestra historia local y latinoamericana.

Felizmente, en la actualidad existe un conjunto amplio de estudios destinados a quitar el polvo a las experiencias de participación femenina en los hitos de nuestra historia y a echar luz sobre los motivos de esta ausencia en la historiografía oficial.

Entre ellos se destaca el trabajo de Dora Barrancos *Mujeres en la sociedad argentina: una historia de cinco siglos* (2007). Barrancos destaca el diferente papel desempeñado por las mujeres en los pueblos originarios, determinado fuertemente por las diferencias entre estas comunidades, señalando asimismo la dificultad de este tipo de estudios y la preeminencia de los versados sobre las grandes civilizaciones. La autora desmitifica los estudios antropológicos que hablaban de la correspondencia armónica entre los sexos en los pueblos originarios.

"Ni los antepasados incas ni las poblaciones actuales se privaron de limitar las prerrogativas de las mujeres, y aunque las celebraciones a las diosas madres (...) contienen modos muy específicos de veneración al otro sexo, no pueden asimilarse a las modalidades de trato corriente, cotidiano, con las mujeres. Las manifestaciones sacrosantas destinadas a mostrar subordinación a las diosas que rigen los destinos de un grupo, la vida y la muerte de sus integrantes, no se constituyen por lo general en la regla de tratamiento de las mujeres de carne y hueso" (2007:16).

Sí parece claro que tanto el pueblo mapuche como la mayoría de los pueblos aborígenes no comulgaban con el principio occidental de la moral basado en la virginidad femenina. Sin embargo, en la división de tareas y en la consideración social el poder era fundamentalmente masculino: *"... las mujeres podían influir pero no determinaban las orientaciones fundamentales del poder..."* (Barrancos, 2007:20).

La conquista española interrumpió el desarrollo de los pueblos originarios al imponer sus propios cánones en cuanto a la organización social y su concepción del mundo a partir de lo cual las sociedades originarias resultaron subordinadas a los conquistadores.

La conquista será un hecho notablemente masculino, puesto que se tienen muy pocos datos de mujeres que hayan llegado con los españoles en los primeros períodos. Para las mujeres de los pueblos originarios existió, a partir de ese momento, una doble subordinación dada tanto por su condición de aborígen como de mujer.

De todas maneras, las mujeres de los hidalgos ni remotamente poseían los mismos derechos que estos y, aunque la legislación española era restrictiva de los derechos individuales de todas las personas, a los hombres les era más fácil burlarla así como era menos factible que fueran castigados por ello. Así se ha señalado

“... la rígida moral cristiana, que pretendía reducir el problema del bien y el mal mediante la condenación del sexo como tal y, consecuentemente, mediante la negación de la corporeidad, había circunscrito la desnudez al único espacio en el que le era permitido escapar momentáneamente a esta condenación: el lenocinio. Así, desnudez y prostitución se hicieron indisociables; en tanto que pudor y castidad definían a las mujeres virtuosas. Un discurso paralelo no existía para el hombre, pues se daba por supuesto que el mal residía desde siempre en las mujeres” (Bohórquez, <http://www.cricyt.edu.ar/estudios/fautores.htm>, noviembre de 2009).

Iniciado el proceso de independencia debe destacarse el papel desempeñado por Juana Azurduy, nacida el 8 de marzo de 1780 en Chuquisaca. Juana mostró su valor en diversas batallas venciendo a los españoles en El Villar; se reunió con Bolívar en Sucre; y ya viuda del revolucionario Padilla, se trasladó a Salta para ponerse al servicio de Martín Miguel de Güemes. Este le otorgó en 1816, con permiso del Director Pueyrredón, el grado de teniente coronel con derecho al uso del uniforme y con todos los privilegios del rango.

Pero si bien muchas mujeres participaron activamente en el proceso revolucionario e independentista latinoamericano, no por ello su condición fue mejor luego de la Revolución de Mayo.

Después de la Revolución el matrimonio continuó siendo el centro de la vida de las mujeres, un paso inexcusable a partir del cual se consideraba deplorable el estado de soltería. Tanto hombres como mujeres menores de 25 años requerían venia paterna para casarse y hasta veinte años después de la Revolución el grado de discriminación era tal que los juicios de disenso se fundaban aun en cuestiones de “limpieza de sangre” o “limpieza de raza”. Los juicios de disenso eran un recurso jurídico disponible para aquellos jóvenes que no obtenían la venia paterna para desposar a la persona elegida. Este es el primer punto en el cual se destaca Mariquita Sánchez (llamada realmente María de todos los Santos Sánchez de Velazco y Trillo) que estuvo en juicio con su padre porque le impedía contraer matrimonio con Martín Jacobo de Thompson. El matrimonio resultó autorizado judicialmente al aceptarse las dispensas.

Viuda y vuelta a casar, Mariquita fue protagonista y anfitriona de numerosas reuniones políticas y culturales e inspiradora de muchos jóvenes enfrentados a Rosas, como Juan Bautista Alberdi (Barrancos, 2007:66). En otra vertiente ideológica también se destacaron figuras femeninas que apoyaban a Juan Manuel de Rosas, como María Josefa y Encarnación Ezcurra.

Sirva esto entonces de sucinto ejemplo del protagonismo femenino tanto en el proceso y las guerras independentistas como civiles previas a la Constitución Nacional de 1953.

Esta Constitución de impronta liberal no contempló en forma expresa los derechos políticos, si bien consagró un sistema representativo y el derecho a la igualdad en el artículo 16: *“La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad...”*

La vida “privada” de las mujeres excluidas del ámbito público fue regulada por el Código Civil, obra de Dalmacio Vélez Sársfield que data de 1869 durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. El Código Civil consagró la incapacidad relativa de la mujer casada, colocándola bajo la tutela del marido. Así, el artículo 55 sostenía la incapacidad relativa de la mujer y el 57 disponía que a todos los efectos su representante era el marido: la mujer casada no tenía derecho a educarse ni a realizar actividades laborales o comerciales, ni podía iniciar juicios, ni brindar testimonios en ellos sin su consentimiento; tampoco tenía la administración de sus bienes sin esta venia. En concordancia con estas normas civiles, el Código Penal tipificó en forma diferente el adulterio masculino (que requería amancebamiento) del femenino dado por un único acto sexual.

Los derechos de las mujeres fueron considerablemente ampliados recién en 1926 a partir del impulso del diputado socialista Bravo, uno de los promotores de los contenidos que se plasmarían en la ley 11.357.

II. B. Del Centenario a la conquista del derecho al sufragio

A principios del siglo pasado el Centenario de la Revolución de Mayo mostrará, a nuestra consideración, dos hechos significativos en la historia argentina.

En primer lugar, la sanción de la Ley N° 8871 -conocida como Ley Sáenz Peña por el presidente que la impulsó- que instituyó el sufragio universal, igual, secreto, obligatorio y, por supuesto, masculino. La reforma al sufragio y al sistema electoral estuvo orientada a ampliar la base de legitimidad política de la oligarquía dominante, pero tuvo un efecto contrario al permitir la irrupción de una fuerza popular, como fue el radicalismo de principios del siglo pasado. De esta manera, la ley que “creaba al sufragante” (Ansaldi, 1999) reafirmaba la exclusión de la mujer de la arena política.

En segundo lugar, la participación activa de mujeres en los partidos políticos (fundamentalmente en el socialismo y también en el radicalismo) y el nacimiento del movimiento sufragista.

En el año del Centenario, se realizó a instancias de la Asociación de Mujeres Universitarias en Buenos Aires el Primer Congreso Feminista Internacional. Al mismo tiempo se desarrollaba el Primer Congreso Patriótico de Señoras, de tendencias más conservadoras. Los derechos políticos femeninos aparecen fuertemente en escena, aunque con restricciones.

En mayo de 1909 se fundó la Liga Feminista Nacional con la dirección de María Abella de Ramírez, que entre los puntos de su programa de acción establecía: 1. Que el matrimonio no haga perder a la esposa ninguno de sus derechos; 2. Protección del estado de las mujeres en sus funciones de madre; 3. Divorcio absoluto; 4. Protección de la niñez (citado en Barrancos, 2002).

Aquí descolla la figura de Julieta Lanteri, una de las más osadas en la vindicación de los derechos femeninos. Esta médica de origen italiano da muestras de “... una voluntad singularmente determinada, la exhibición de un deseo potente de libertad y la afirmación de una subjetividad soberana que la condujeron a emprendimientos nada convencionales” (Barrancos, 2002:48).

Fundó en 1909 la Liga Nacional de Mujeres Librepensadoras con un programa de acción de seis puntos: 1. Derechos políticos para la mujer argentina o ciudadanizada; 2. Igualdad de derechos civiles y legales para ambos sexos; 3. Divorcio absoluto; 4. Educación mixta laica, igual para ambos sexos; 5. Derechos del niño y del menor; 6. Dignificación del trabajo, supresión de la servidumbre (citado en Barrancos, 2002: 50).

Julieta inició, con la venia de su marido -recordemos que las mujeres eran incapaces, una disputa legal con el gobierno y consiguió un fallo sin precedentes por el cual obtuvo la ciudadanía y el reconocimiento del derecho al voto por aplicación de la Constitución. De esta manera, no sólo logro ser inscripta en el padrón sino que llegó a sufragar en las elecciones del 26 de noviembre de 1911 para el Concejo Deliberante de Buenos Aires (Valobra, 2008: 2).

Lanteri, puesto que la Ley Sáenz Peña construía el padrón electoral a partir de la realización de servicio militar, también solicitó ser admitida y así obtener los derechos políticos.

Palermo analiza en *“El sufragio femenino en el Congreso Nacional: ideologías de género y ciudadanía en la Argentina (1916-1955)”* los debates producidos a partir de propuestas en pro de los derechos políticos de las mujeres en el Congreso Nacional. Destaca la autora que en las discusiones se omitió la alusión a los reclamos del feminismo y que, al igual que lo había sido la Ley Sáenz Peña, se esperaba que el otorgamiento de los derechos políticos a la mujer fuese un instrumento para *“... consolidar los principios republicanos y desarrollar la conciencia cívica”*, antes que terminar con una práctica discriminatoria o simplemente fortalecer los derechos individuales de la mujer. Una de las cuestiones más notables que surgen del trabajo de Palermo es que la ideología de la domesticidad, así como tradicionalmente fundó la exclusión de la mujer de los ámbitos públicos, se vuelve para muchos de quienes participan en el debate el propio fundamento de la participación femenina, en su rol maternal (Palermo, 1998: 55). O sea que en esta etapa los supuestos atributos “femeninos” clásicos y estereotipados se vuelven importantes para consolidar el bienestar de la comunidad nacional: *“era importante sumar ‘a la mujer como fuerza moderadora y constructora del sentir nacional frente al conflicto social’”* (Palermo, 1998: 59-60). El voto femenino obligatorio y sin restricciones -frente a postura que sólo lo otorgaban a las alfabetas o las universitarias-ganó la mayoría en diputados en 1932 pero no se trató en el Senado.

La ley de sufragio femenino fue sancionada el 23 de septiembre de 1947 durante el primer gobierno de Perón y su tratamiento en la Cámara de diputados el 7 de septiembre suscitó tanto el apoyo de la mayoría peronista como de la primera minoría radical. El artículo 1º de la ley 13.010 establece *“Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos”*.

Existen múltiples y disímiles interpretaciones del porqué de la sanción en este momento. Por una parte debe considerarse el contexto histórico de la posguerra. En los países que participaron en la contienda durante la Segunda Guerra Mundial el trabajo de las mujeres había crecido en alta escala a partir de la concurrencia de los hombres al frente de batalla. También, como preludio de lo que sería la conformación de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, se habían comenzado a suscribir compromisos externos en materias vinculadas a la concreción de derechos fundamentales. Es así que la Argentina suscribe las Actas de Chapultepec, donde asume el compromiso de garantizar los derechos cívicos de la mujer.

Por otra parte, si bien con puntos altos y bajos, el sufragismo sigue desarrollándose en la Argentina y en el Mundo.

En octubre de 1944, había sido Juan Domingo Perón quien creara la División de Trabajo y Asistencia de la Mujer dependiente de la Dirección General de Trabajo y Acción Social Directa, siendo la primera vez que el Estado Argentino asumía los derechos femeninos como una reivindicación propia (Valobra, 2008: 7).

Lo cierto es que la conquista del sufragio se dio en esta etapa de la mano de un gobierno de fuerte arraigo popular. Esta característica llevó, junto con las estrategias desplegadas para consolidar el poder por parte del peronismo, a una invisibilización de las luchas feministas anteriores. Para Palermo *“... la especificidad del discurso peronista sobre los derechos políticos de la mujer radica en el modo en que recuperó y redefinió elementos propios del feminismo materialista al incorporarlos a la retórica feminista”* (71).

Sostiene Mallimaci (2007) que

“El peronismo disloca en parte el modelo nacionalista y católico en lo referido a los derechos de las mujeres... La ley de participación política de la mujer posee diversas vertientes. Para el peronismo es parte de la igualdad de las personas como lo proclama la doctrina social de la Iglesia, forma parte de su rol maternal y responsabilidad familiar al interior de la comunidad nacional y expresa como -Eva Perón- la ciudadana leal al Pueblo y a Perón. Pero también insiste -y en esto toma distancia del discurso católico- en la explotación que sufren las mujeres en su doble condición de trabajadoras dentro y fuera del hogar. Por tal motivo propondrá una avanzada legislación para mujeres y madres trabajadoras”.

Podría decirse entonces que la crítica más fuerte que puede hacerse al peronismo en esta cuestión es el mantenimiento de roles sociales establecidos para el hombre y la mujer en función de diferencias biológicas: el estereotipo de la madre abnegada y desinteresada se lleva al ámbito público y la inserción más fuerte de la mujer en la política se da a través de la acción social. La otra cara del peronismo es la crítica a los propios fundamentos de la exclusión y la subordinación de la mujer: fue el peronismo el que destacó el rol de la mujer como trabajadora: no sólo en la industria sino también en el hogar. Una lógica contradictoria en la que por un lado la mujer extiende su rol maternal al ámbito público y por otro lado se reconoce que el ámbito privado está plagado de injusticias.

No puede omitirse el papel desempeñado por María Eva Duarte de Perón, esposa del líder, que representa el modelo de la mujer que se construye a partir de su trabajo. Hija bastarda, sin instrucción, joven, carismática, vehemente, desempeña un rol que en el imaginario popular llega en ocasiones a eclipsar la figura del líder político. En sus encendidos discursos también visibilizó esta doble victimización de la mujer, en el hogar y en el trabajo.

La ley 13.010 significó la incorporación de 4.225.467 mujeres al padrón electoral, que representaban el 48% del total del mismo. La primera oportunidad en que las mujeres participan activamente de los comicios a nivel nacional se da el 11 de noviembre de 1951 (no participan de la constituyente de 1949), cuya presencia supera en cuatro puntos a la de los hombres (Mansilla, 2003).

La figura de Eva Perón es clave para la integración de la mujer al Partido Justicialista, donde la rama femenina estaba bajo su conducción y participaba con el 33% de los cargos electivos. En las elecciones de los dos períodos del éxito electoral del peronismo es determinante en el incremento del número de legisladoras. Las mujeres diputadas lograron el 15.5% de la bancas, en tanto en 1955 representaron el 22% del cuerpo (Mansilla, 2003).

La proscripción del peronismo entre 1955 y 1973 determinará una declinación importante de la participación femenina hasta la sanción de la Ley de Cupo Femenino en 1991 (1).

II. C. La aniquilación absoluta de los derechos y el protagonismo de las mujeres

El ciclo de golpes militares que asoló a la Argentina durante el siglo pasado tuvo su última y más trágica manifestación en el iniciado el 24 de marzo de 1976. Fue frente a las inconmensurables atrocidades de esta dictadura que las mujeres hicieron escuchar su voz.

En la lucha contra la dictadura y en pos de la recuperación de la democracia, no puede dejar de resaltarse el papel central de las mujeres, fundamentalmente a través de las Asociaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

La irrupción de las mujeres en el ámbito público transformó ese espacio a partir de una lucha ciudadana que atravesaba todas las clases sociales porque el punto de reunión tenía que ver con la búsqueda de los hijos, de los nietos, de la justicia.

Las madres y abuelas ocuparon el espacio de la política, la plaza de Mayo y tomaron de ahí su nombre. Dijeron “acá estamos” levantando una reivindicación ética, el respeto de la vida: *vamos a pedir por la vida de nuestros hijos, vamos a recuperar el espacio de la manifestación para decir que hay ciertas cosas que se tienen que terminar, vamos a reclamar justicia siempre*. Esos imperativos de las que fueron catalogadas como “locas de la Plaza” son los que hoy se hallan presentes en la democracia, son los imperativos globales reconocidos en los tratados de Derechos Humanos.

(1) Debemos hacer un apartado para señalar que la capacidad jurídica plena de la mujer mayor de edad, cualquiera sea su estado civil, fue consagrada el 22 de abril de 1968 por el Decreto Ley 17.711, suscripto por el entonces presidente de facto Juan Carlos Onganía. La ciudadanía tuvo conocimiento de las reformas introducidas al día siguiente por el discurso del Dr. Guillermo Borda, Ministro de Interior del régimen, emitido en cadena nacional. Sobre el punto y los proyectos de modificación anteriores al código respecto de los derechos de las mujeres véase Giordano, 2008.

Pero a pesar del relevante rol que cumplieron las mujeres en la oposición a la dictadura y en la transición a la democracia, y de que su participación fue masiva en la política una vez instalado el gobierno democrático el 10 de diciembre de 1983, este hecho no se tradujo en la participación en puestos de decisión.

II. D. Democracia, cupo femenino y Constitución

A partir del retorno democrático se produjo un cambio en las mujeres políticas. Si los hombres habían ignorado en los debates concernientes el derecho al sufragio de las mujeres, la lucha llevada adelante por los movimientos feministas y sufragistas, las mujeres políticas adquirieron en la reciente democracia una conciencia de género que hicieron pública.

Las mujeres políticas se visualizaron a sí mismas como grupo, feminizándose, tomando conciencia de la pertenencia al género femenino a pesar de las diferentes ideologías, lo que se tradujo en una visibilización más profunda de la discriminación que permitió profundizar el análisis de sus causas y de las posibilidades de su remoción.

La discriminación de la mujer en la política era muy profunda: en 1988 constituían el 48 por ciento de las afiliadas a los partidos políticos y en 1991 eran el 51 por ciento del electorado pero sólo ocupaban el 3 por ciento de las bancas del Congreso.

Debemos destacar que en términos de representación política femenina el sufragio femenino fue el último antecedente hasta la sanción de ley 24.012, llamada ley de cupos.

El primer proyecto de la ley de cupos fue presentado en 1989 por la radical Margarita Malharro de Torres. Luego, ese mismo año, un conjunto de legisladoras de distintos bloques presentó un proyecto según el cual las listas no podían contener más de un 70 por ciento de personas del mismo sexo, debiendo ubicarse cada 2 candidatos de un mismo sexo uno del otro, alternando desde el primer lugar de la lista.

La sanción de esta ley (el 6 de noviembre de 1991) modificó el Código Nacional Electoral en su artículo 60, estableciendo la obligación de incluir un 30% de mujeres como mínimo en las listas de candidatos a cargos electivos y en proporciones con posibilidades de resultar electas. La ley establece que de no cumplirse con este requisito no se oficializará la lista.

Esta ley instituye lo que se denomina una acción positiva, término que engloba al conjunto de medidas diseñadas y aplicadas para corregir una situación de discriminación de un colectivo social por su condición sexual, de etnia, raza o religión.

Las medidas de acción positiva constituyen una excepción al principio general de trato igual, por lo que deben justificarse con criterios de objetividad y proporcionalidad y ser aplicadas estrictamente en el caso concreto (presupuestos de hecho y de derecho que las justifican). Por ello se trata de medidas de carácter temporal que se implementan en ámbitos y periodos específicos. Al respecto la Convención Contra la Discriminación de la Mujer establece en su artículo 4º: *“La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención...”*

Sus objetivos se encaminan al logro de la igualdad real o de oportunidades en los distintos ámbitos de la sociedad, igualando puntos de partida, y requieren una conducta de dar o hacer por parte del Estado. Procuran actuar sobre las causas que impiden el acceso a los derechos fundamentales de los sectores desaventajados, tratando de modificar las mismas a través de la eliminación de los tratos discriminatorios.

La constitucionalidad de este tipo de medidas positivas “de resultado”, que debe interpretarse a la luz del artículo 4º de la CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women), fue cuestionada sobre la base del principio de igualdad formal ante la ley y defendido desde la base de la igualdad real.

Su reconocimiento en la Constitución de 1994 eliminó la posibilidad de que la ley de cupo no fuera considerada de orden público, como la habían interpretado algunos jueces electorales durante los primeros años de su vigencia.

En 1994 la discriminación política de la mujer era aún muy fuerte. En la Convención Nacional Constituyente se señaló que para las elecciones de 1991 el 70 por ciento de la población argentina (distritos de la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) eligió sólo a dos diputadas nacionales, mientras que el total en todo el país alcanzó apenas a cinco.

La convencional Lipszyc señala en el debate que:

“... en la Cámara de Diputados de la Nación actualmente hay sólo 34 señoras diputadas sobre un total de 257 miembros. Estamos en el mismo nivel que en 1955, con la diferencia de que en aquella época el cuerpo estaba integrado por 154 miembros. Esto implica que la proporción actual es de un 13 por ciento en tanto que en 1955 era de un 25 por ciento”

El texto de la Constitución a partir de 1994 cambia sustancialmente la concepción del derecho a la igualdad de su formulación originaria.

Ya señalamos que la Constitución de 1853, como exponente de su época, estableció la igualdad jurídica al consagrar que “... todos los habitantes son iguales ante la ley...”, pero la concepción de ciudadanía que surge del artículo 16 es formal y abstracta. Esta “imparcialidad de trato” por parte del Estado hacia los particulares no da cuenta de concepciones culturales excluyentes que afectan a distintos grupos y se reflejan en el acceso a los derechos.

La Constitución reformada consagra la idea de igualdad sustancial o real de oportunidades, a la vez que eleva a la jerarquía constitucional a determinados instrumentos de protección de los derechos humanos que contemplan estas medidas (art. 75 inc. 22).

La actual Constitución establece el principio de igualdad real entre varones y mujeres en el acceso a los cargos electivos y partidarios (Art. 37 “... *La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral*”); el principio de igualdad real de oportunidades y trato en general en el artículo 75 inc. 23; y establece en ambos a las acciones positivas como medio para su garantía. Por otra parte, como cláusula transitoria segunda, se dispuso que las acciones positivas a adoptar en el futuro no pudieran ser inferiores a las vigentes, imponiendo una barrera constitucional a la disminución de las cuotas mínimas de la ley 24.012.

La noción de igualdad real de oportunidades apunta a morigerar las diferencias en el punto de partida rechazando diferencias fundadas en cuestiones de riqueza, etnia, sexo, género y poder, que son gravitantes para que unos individuos adquieran posiciones favorables sobre otros dentro de la sociedad.

Esta igualdad plebeya, la igualdad de los realmente iguales no desconoce el concepto de igualdad formal sino que lo califica de insuficiente y por tanto lo matiza, obligándose el Estado a actuar con medidas concretas para remover los obstáculos fácticos que impiden la igualdad de posibilidades de todas las personas de desarrollarse íntegramente.

Para esta concepción de la igualdad las acciones positivas se vuelven indispensables para transformar la retórica del derecho internacional de los derechos humanos en normas efectivas que garanticen su cumplimiento.

Resuelta por los propios constituyentes la constitucionalidad y el carácter de orden público de estas acciones, la legislación ha avanzado en la incorporación de estas medidas en otros ámbitos, como el sindical (2) aunque no han tenido éxito proyectos tendientes a la ampliación de las acciones positivas al ámbito judicial o de la administración pública.

(2) En 2002 se sancionó la ley de cupo sindical femenino 25.674 modificatoria de la ley 23.551, que establece la participación paritaria de los trabajadores y trabajadoras en la vida interna sindical, la obligatoriedad de incorporar un treinta por ciento de mujeres como mínimo en las listas para los procesos electorales internos, en todos los

Por su parte, la actual reglamentación de la ley de cuotas (Decreto 1246/00 derogatorio del Decreto 379/93) es más adecuada y resuelve blancos interpretativos de esta. El art. 2º dispone: *“El treinta por ciento de los cargos a integrarse por mujeres, según lo prescripto por la ley 24.012, es una cantidad mínima. En los casos en que la aplicación matemática de este porcentaje determinare fracciones menores a la unidad, el concepto de cantidad mínima será la unidad superior...”* El decreto también establece expresamente que el cupo se aplica a la totalidad de los cargos electivos nacionales (diputados, senadores y constituyentes); que el porcentaje se aplica a la totalidad de candidatos de las listas, pero también al número de cargos que cada partido o alianza renueva; que si un partido o alianza se presenta a elección por primera vez el primer candidato puede ser varón o mujer, pero el segundo no puede ser del mismo sexo; que nunca puede haber tres personas seguidas del mismo sexo en las listas; que cualquier ciudadano de cualquier distrito tiene legitimidad activa para reclamar el cumplimiento de la ley 24.012.

En el plano judicial estas medidas se han aplicado al ámbito privado, como en “Fundación Mujeres en Igualdad y otro c. Freddo SA s/amparo” (3), donde se sostuvo que es obligación adoptar medidas judiciales para garantizar el pleno goce igualitario de los derechos humanos, las cuales no necesitan un desarrollo legislativo previo.

En vísperas del Bicentenario de la Revolución de Mayo la presidencia de la Nación Argentina es ocupada por primera vez por una mujer que fue electa para ocupar ese cargo, pero pese a la importante significación que ello tiene desde lo cultural y, a pesar de la ley de cupos, la discriminación hacia la mujer sigue presente y se manifiesta a través de incumplimientos tanto de la ley de cupos nacional así como en las restantes provincias que la contemplan en su legislación (la mayoría). Es aquí cuando se vuelve más relevante desde el estado el rol del Poder Judicial así como la comunión de las mujeres, y de las mujeres políticas, frente a estos incumplimientos.

III. Conclusiones

La participación de las mujeres en el ámbito público y en la política tiene una significación trascendente para el desarrollo de la ciudadanía y la democracia.

Las consagraciones normativas, producto de largas luchas, que reconocieron primero el derecho al sufragio y luego las acciones afirmativas son justas pero insuficientes para acelerar los cambios culturales.

La mayoría de las mujeres no son políticas, no tienen poder y muchas de ellas son sus víctimas (Lapalma, 2009), sobre todo cuando a su condición de mujer se le suma la pertenencia a otro grupo discriminado y excluido, como las mujeres migrantes, las trabajadoras sexuales, las pobres, las madres del paco, las víctimas de la violencia familiar, las víctimas de la violencia sexual, etc.

Su participación política se vuelve una necesidad para mejorar la vida y el ejercicio de los derechos de las mujeres y de la sociedad toda. Las medidas afirmativas implementadas les otorgan también la posibilidad de ser la voz y de viabilizar en favor de otros grupos desfavorecidos o discriminados, la sanción de este tipo de medidas. En este sentido, el Bicentenario, haciéndonos mirar hacia atrás, nos lleva también a ver la colonización de América y las violaciones a los derechos de los pueblos originarios. Nos impulsa a revisar las ideas de “pueblo homogéneo nacional” que las elites y el Estado a través del sistema educativo construyeron sobre la falsedad y la negación de la verdad histórica.

La reforma constitucional de 1994 modificó la ideología de nuestra Constitución en lo que respecta a la igualdad, pasando de una igualdad formal a una igualdad sustancial, a una igualdad plebeya.

niveles de organización sindical y tanto para los órganos de conducción y representación como para la conformación de las unidades de negociación colectiva.

(3) Algunos fallos han contemplado este tipo de medidas para otros grupos desaventajados pero el tema excede el objeto de esta ponencia.

La redefinición del espacio de lo público y lo privado ampliará los márgenes de la democracia, pero la responsabilidad involucra no sólo al Estado, sino que exige a la sociedad civil reclamar activamente la vigencia plena de sus derechos.

Por eso proponemos reivindicar la igualdad de trato frente a la igualdad formal, reivindicar e impulsar la existencia de medidas de acción afirmativa destinadas a procurar la participación de las mujeres en la política y a reconocer que lo que sucede en el ámbito privado también es una manifestación de estado de la democracia. Finalmente, estudiar los mecanismos que permitirían impulsar estas acciones en favor de otros grupos desaventajados y discriminados.

IV. Bibliografía

- ANSALDI, Waldo. "Crear al sufragante: la universalización masculina de la ciudadanía política. La reforma electoral de 1912", en *Anales, Nueva Época*, 2, Suecia, 1999, págs. 1/35.
- BARRANCOS, Dora. *Inclusión / Exclusión. Historia con mujeres*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2002.
- BARRANCOS, Dora. *Mujeres en la sociedad argentina: una historia de cinco siglos*, Sudamericana, Buenos Aires, 2007.
- BOHÓRQUEZ, Carmen, "La mujer indígena y la colonización de la erótica en América Latina", Año 2, N° 2. En <http://www.cricyt.edu.ar/estudios/fautores.htm>
- GIORDANO, Verónica. "La legislación sobre la mujer en Argentina y Brasil 1960s-1990s. Continuidades y permanencias de las dictaduras a las democracias", en Waldo Ansaldi (director), *La democracia en América Latina, un barco a la deriva*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007, págs. 469/490.
- LAPALMA, María Monserrat. "Derecho a ser elegidas o el cupo femenino". Ponencia presentada en el VI Congreso Nacional de Derecho Político "Crisis Global e Instituciones Políticas", Asociación Argentina de Derecho Político, Catamarca 23, 24 y 25 de septiembre de 2009, Facultad de Derecho, UNC, 2009.
- MALLIMACI, Fortunato. "Los derechos humanos y la ciudadanía como matriz de análisis social" en *Una historia social del Siglo XX*, EDHASA, Buenos Aires, 2007.
- PALERMO, Silvina. "El sufragio femenino en el Congreso Nacional: ideologías de género y ciudadanía en la Argentina (1916-1955)", en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana*, Tercera Serie, N° 16 y 17, 1997/8, págs. 151/178.
- VALOBRA, Adriana. "Sufragismo, feminismo y mujeres en los partidos políticos en la Argentina de la primera mitad del siglo XX", en Ammis, Bretagne, France, 2009. ♦